

Es copia que certifico: Mexico, 15 de Noviembre de 1873. *Emilio Ordaz*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco por el C. Saturnino Vázquez; contra la sentencia pronunciada por el C. Administrador de rentas de San Pedro y confirmada por el Gobernador del Estado, condenándolo al pago de derechos triples.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Saturnino Vázquez conducía de Monterey para esta ciudad, Tepic, Sayula, Zapotlan y Colima, cuatrocientas arrobas de sebo macho, cubiertas con una guía y tres pases expedidos por la Administración de rentas del Fresnillo, Estado de Zacatecas. Al pasar por el puente de Toluatlan á 7 leguas de Guadalajara, fué aprehendida la carga por el recaudador C. José Berni, según lo prevenido por el artículo cuarto del decreto del Estado número 323, por no venir los documentos requisitados con las notas de presentación y afianzamiento de derechos en el primer alcabalatorio del tránsito por Jalisco, que previene dicho artículo; y habiéndose elegido por el conductor la vía administrativa, ejerciendo la facultad que concede el decreto también del Estado, de Octubre 28 de 1872, el Administrador de rentas sustanció el juicio respectivo y declaró el contrabando, penado con la mitad del valor del efecto, por el artículo sexto del citado decreto 323; Vázquez apeló de la sentencia, y al confirmarla en segunda instancia el C. Gobernador, por equidad y en uso de las facultades extraordinarias que tiene, redujo la pena á pagar derechos triples.

Contra la ejecución de ese fallo se ha presentado el Lic. Emeterio Robles Gil, apoderado de Vázquez, pidiendo amparo con fundamento de las fracciones primera y segunda del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, porque según alega, se ataca la garantía otorgada por el artículo 21 de la Constitución federal, al haber sido Vázquez juzgado y sentenciado por la autoridad administrativa, y porque se ha hecho aplicación en el juicio, del decreto 323, que por establecer restricciones onerosas al comercio de Estado á Estado, peca contra la fracción novena del artículo 72 de la misma Constitución.

A solicitud del amparante y de conformidad con lo pedido por este ministerio, el juzgado decretó la suspensión del acto reclamado, debiendo resolver en seguida sobre lo principal.

El Promotor cree, que en el procedimiento administrativo seguido contra Vázquez y en el fallo que se trata de ejecutar por el Administrador de rentas de San Pedro, no se han infringido ni se atacan los artículos 21 y 72 de la Constitución. Si contra el amparante se siguió la vía administrativa y no la judicial, fué porque él mismo así lo quiso, eligiendo aquella según la facultad que le concedía la ley de Octubre 28 de 1872; porque de su espontánea voluntad constituyó juez al empleado de San Pedro; porque trató de evitar que su negocio quedara sujeto á los procedimientos largos, embarazosos y molestos de los tribunales, lo que está permitido también por las leyes federales, y no peca contra el artículo 21 de la Constitución, como lo están por el derecho común, y no pecan contra la carta federal los arbitrajes que diariamente se ven entre los particulares, sobre multitud de cuestiones de la competencia judicial. Y por otra parte, si por el decreto 323 de la Legislatura del Estado, artículo tercero, se tiene prevenido, con el fin único de evitar los contrabandos, que los efectos introducidos al territorio de Jalisco deberán garantizar los

derechos respectivos en el primer alcabalatorio que tocaren, bajo la pena del artículo sexto, no se ataca por eso el artículo 72 constitucional en su fracción novena, porque las restricciones onerosas en el comercio de Estado á Estado, no consisten en las medidas de seguridad que para evitar el acostumbrado fraude, cada Estado es libre de tomar, sino en cobrar derechos por el simple tránsito de mercancías por su territorio, ó en imponer mayores contribuciones á los frutos de otro Estado que las exigidas á sus propios frutos, como testualmente lo explica y determina la ley general de Mayo 2 de 1868, lo que indudablemente no se hace en el decreto 323 aplicado en contra del quejoso.

Por lo mismo, el Promotor concluye pidiendo: que la Justicia federal no ampare ni proteja al C. Saturnino Vázquez en contra del Administrador de rentas de San Pedro, por la sentencia administrativa que trata de ejecutar. Guadalajara, Julio 5 de 1873.—A. Camarena.

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Guadalajara, Julio 20 de 1873.—Vistos: El C. Emeterio Rebles Gil, con poder en forma del C. Saturnino Vázquez, vecino del Fresno, Estado de Zacatecas, entabló ante juzgado juicio de amparo y protección de garantías, exponiendo: que su poderdante, conducía de Monterey con dirección á Colima, cuatrocientas arrobas de sebo, resguardadas con los documentos que en aquella Capital le expidieron; que á mayor abundamiento, sacó guías en Aguascalientes; que con esta seguridad, no tocó al entrar á Jalisco al primer alcabalatorio, y por que ignoraba las prescripciones del decreto del Gobierno del Estado número 323, publicado el 25 de Octubre del año próximo pasado; que en el tránsito fué contenido en el puente de Tololotlan, y aprehendida su carga, fué juzgado administrativamente y sen-

tenciado á pagar derechos cuádruplos. Cree el quejoso que se ha violado en su representado la garantía otorgada en el artículo 21 de la Constitución general; y que además, se ha invadido la esfera de la autoridad federal, supuesto que conforme á la fracción 9ª del artículo 72 de la misma Constitución es del resorte del Congreso federal impedir que en el comercio de Estado á Estado se pongan restricciones onerosas, como las que contiene el decreto citado.

Pedida informe al C. Administrador de rentas de San Pedro, como ejecutor del acto reclamado, lo evacuó diciendo: que en efecto se juzgó administrativamente el negocio de D. Saturnino Vázquez, de conformidad con lo que á este respecto otorga el artículo 28 del decreto de 18 de Octubre de 1872, y que se siguió en acta como está prevenido en la ley general vigente de 28 de Diciembre de 1848, declarándose que las cuatrocientas arrobas de sebo, habían caído en la pena que establece el artículo sexto del decreto número 323, por no haberse presentado el interesado á ninguna de las oficinas del Estado, cuando ya tocaba á la Capital, como lo previene el artículo tercero, y conminándolo por último, en el caso de pagar la mitad del valor del efecto aprehendido, con fundamento de los artículos cuarto y sexto, y que notificada esta sentencia, apeló de ella el C. Vázquez; y el C. Gobernador del Estado confirmó la sentencia, condenando al interesado, en virtud de sus facultades extraordinarias, á pagar solo derechos triples; y por último, que Vázquez se sometió voluntariamente á ser juzgado administrativamente.

El juez que suscribe, si bien considera que en el procedimiento seguido contra Vázquez, no envuelve el ataque de la garantía constitucional que otorga el artículo 21 en que se apoyó el representante de Vázquez, sin embargo, la resolución se funda en el decreto número 323 de Congreso del Estado, que visiblemente peca contra la fracción novena del artículo 72 de la

Constitucion general; porque el precepto que contiene el artículo tercero del citado decreto, es de ejecucion imposible para un negociante que se introduzca al Estado, solo de simple tránsito y con cargamento de poco ó mucho valor, porque no encontrará persona que lo garantice, cuando él no conoce ni tiene relacion con ningun vecino, ni á él hay quien lo conozca. Por tales razones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion general y de la ley de 20 de Enero de 1869, se falla con las proposiciones siguientes: Primera: la Justicia de la Union ampara y protege al C. Saturnino Vázquez, contra la sentencia pronunciada por el C. Administrador de rentas de San Pedro y confirmada por el Gobernador del Estado, condenándolo al pago de derechos triples, por estar fundada en un decreto que pugna con la fraccion novena del artículo 72. Segunda: notifíquese esta sentencia; publíquese en el periódico Oficial del Estado, y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.—*D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.*

Es copia. Guadalajara, Agosto 5 de 1873.—*G. J. Gallegos.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 3 de 1873.—Visto el juicio de amparo que en 17 de Junio último promovió en la ciudad de Guadalajara ante el juez de Distrito del Estado de Jalisco, el C. Emeterio Robles Gil, por el C. Saturnino Vazquez, vecino del Fresnillo en el Estado de Zacatecas, contra las providencias del Administrador de rentas de San Pedro por las cuales trata de hacer efectivo el fallo pronunciado por él, y confirmado por el Gobernador del Estado de Jalisco, condenando á Vazquez como conductor de

cuatrocientas arrobas de cebo, al pago de los derechos triples que impone el decreto núm. 323 publicado en 25 de... 1872, á virtud de no haber llenado las prevenciones del mismo decreto, cuyas providencias violan en concepto del promovente, la garantía que otorga la Constitucion federal en su art. 21, aplicándosele además el decreto de un Estado que invade la esfera de la autoridad federal, porque pone restriccion al comercio, contra lo prevenido en el art. 72 de la citada Constitucion.

Vistas las constancias de autos y la sentencia del juez de Distrito en la que concede el amparo pedido. Considerando: que si bien no hay violacion del art. 21, segun esas constancias, si hay la invasion de autoridad, reclamada segun la fraccion 9ª del art. 72 constitucional, por cuanto á que el decreto núm. 323, impone al comercio restriccion y dificultades extralimitando lo prevenido en aquella fraccion 9ª.

Por los méritos expuestos, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juez de Distrito del Estado de Jalisco, dictada en Guadalajara á 20 de Julio de este año, en cuya sentencia declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Saturnino Vazquez, contra la sentencia pronunciada por el C. Administrador de San Pedro, y confirmada por el Gobernador del Estado, condenándolo al pago de derechos triples, por estar fundada en un decreto que pugna con la fraccion 9ª del art. 12 de la Constitucion de la República.

Devuélvanse los autos al Juez de Distrito que los elevó en revision, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Tóca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*J. M. Iglesias.*—

*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—E. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.*

Es copia que certifico. México, Setiembre 28 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

## CRIMINAL.

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Michoacan, contra D. Antonio Espinosa y D. Francisco Lopez Páramo, por el delito de peculado.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez suplente de Distrito.

Elevada la presente causa ó plenario, se los hizo á los procesados D. Antonio Espinosa y D. Francisco Lopez Páramo el correspondiente cargo de peculado, fundándose este en los hechos que á continuacion se expresan:

Haber aparecido un faltante de \$ 148 22 cents. en el reconocimiento practicado el 18 de Setiembre del año próximo anterior por ese Juzgado, y que ascendió á la cantidad de \$373 segun el estado comparativo presentado por el C. Gefe de Hacienda; haber resultado un deficiente de \$150 en el corte de caja que se practicó el dia 20 por el empleado encargado de la Gefatura, y por disposicion del C. Juez propietario; haber desaparecido de la caja, el libramiento de \$150 de D. Antonio Carranza, al hacerse por los responsables la entrega de la oficina al Administrador interino, siendo así que tal documento había figurado en los cortes anteriores; y por último, haber adelantado sueldos tanto al ex-administrador Espinosa, como al cartero Emigdio Herrera

Los reos, para destruir el cargo en sus expresados fundamentos, hicieron extensas explicaciones en el momento de la confesion, y presentaron algunas pruebas durante el término que se les concedió para ello.

En estado ya el proceso, pasó este Ministerio á examinar con el detenimiento debido, tanto las razones alegadas por los reos en su defensa, como los justificantes que produjeron con el mismo objeto.

V. pues, C. Juez, se servirá tener á bien que el Promotor que suscribe recorra con toda la atencion que el caso demanda, las constancias procesales, á fin de que no por una ligereza ó una perjudicial brevedad, queden sin defensa los sagrados intereses que le están encomendados por virtud de su alto Ministerio, ni tampoco en contraposicion, quede injustamente vulnerada la reputacion de unos empleados, en cuya justificacion está interesado el buen nombre de una de las oficinas de la Federacion en este Estado.

Mas antes de entrar al fondo de la cuestion, es conveniente recorrer de una ojeada la historia de este negocio, cuyos antecedentes son de una importancia vital en el asunto.

A instancia del mismo ex-administrador D. Antonio Espinosa, se instruyeron en ese Juzgado unas diligencias con el objeto de averiguar el robo de unos sellos que remitian las subalternas de Zacapu, Erongaricuaro y Quiroga.

En dichas diligencias apareció plenamente comprobado, que al venir la diligencia de Pátzcuaro, en el punto denominado la *Verdolaga* fué asaltada por unos bandidos, quienes despojaron á los pasajeros y robaron la balija donde venian los sellos remitidos por dichas administraciones.

Habiéndose practicado cuantas diligencias fueron del caso para averiguar la verdad de los sucesos, el Promotor que suscribe, con vista de todos los datos, formuló su pedimento respectivo, pretendiendo se declarase por el Juzgado estar plenamente